



Para: DAVID ANDRES GIRALDO UMBARILA

Subsecretario de comisión de plan

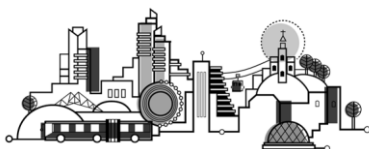
De: MARCO ACOSTA RICO

Concejal de Bogotá


Asunto: Proposición Aditiva para el proyecto de acuerdo 368 de 2024 “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental, y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá camina segura”

Por medio de la presente, me permito presentar **Proposición Aditiva** al proyecto de acuerdo 368 de 2024 “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental, y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá camina segura”, Objetivo II Bogotá Confía en su Bien-estar Tabla 31. Metas del programa 12: Bogotá cuida a su gente

Marco Acosta Rico
Concejal de Bogotá
Partido Colombia Justa Libre
Vocero de Bancada





 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

PROPOSICIÓN No. _____ DE ____ 2024

Aprobada en:

Tema: Proposición Aditiva al proyecto de acuerdo 368 de 2024 “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental, y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá camina segura”

1. Tipo de proposición

Proposición Aditiva

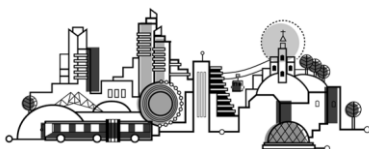
2. Justificación de la Proposición:

En el artículo 13 establece que Las iglesias y confesiones religiosas tendrán, en sus asuntos religiosos, plena autonomía y libertad y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y disposiciones para sus miembros.

En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquellas para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y de su carácter propio, así como del debido respeto de sus creencias, sin perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en especial de los de la libertad, **igualdad** y no discriminación.

La Corte Constitucional en la providencia STP418-2022, Acción de tutela define:

Esta argumentación es avalada por la jurisprudencia constitucional, la cual es consistente en afirmar que “...el carácter más extendido de una determinada religión no implica que ésta pueda recibir un tratamiento privilegiado de parte del Estado, por cuanto la Constitución de 1991 ha conferido igual valor jurídico a todas las





confesiones religiosas, independientemente de la cantidad de creyentes que éstas tengan. Se trata de una igualdad de derecho, o igualdad por nivelación o equiparación, con el fin de preservar el pluralismo y proteger a las minorías religiosas.

Las autoridades estatales deben tener en cuenta que las estrictas prohibiciones constitucionales señaladas en la jurisprudencia constitucional: (i) establecer una religión o iglesia oficial; (ii) Que el Estado se identifique formal y explícitamente con una iglesia o religión; (iii) Que las autoridades realicen actos oficiales que expresen alguna forma de adhesión, promoción, favorecimiento o apoyo, “así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia”; (iv) adoptar “decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión”; o (v) “diseñar e implementar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley”. (Cfr. CC C-152 de 2003 y C 817 de 2011).
(subrayado fuera de texto)

A su vez el artículo 12 numerales 1 y 2 del Decreto Ley 1421 de 1993 y los artículos 72,73, 74, 75,76,85 del Reglamento Interno del Concejo de Bogotá.

Las demás justificaciones se darán en su momento en la intervención respectiva.

3. Presentación De La Proposición

META ORIGINAL	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Tabla 31. Metas del programa 12: Bogotá cuida a su gente Ejecutar 14 iniciativas que garanticen el ejercicio de las libertades fundamentales de religión culto y conciencia en el marco de la política pública existente	Ejecutar 14 iniciativas que garanticen el ejercicio de las libertades fundamentales de religión culto y conciencia en el marco de la política pública existente, la cual se deberá actualizar incluyendo el derecho a la igualdad

